



Hermsillo, Sonora, a 10 de abril de dos mil quince.

... VISTAS para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número RO/34/11, e instruido en contra de la C. (sic), en su carácter de **SECRETARIA EJECUTIVA**

BILINGÜE, adscrita a la Sub-Procuraduría de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 63 fracciones I, II, XI, XXIII y XVI segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y,

..... **RESULTANDO**

1. El día veintisiete de abril de dos mil once, se recibió en esta Dirección General de Responsabilidades **1005 A.P. y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado por el Lic. Alfredo Evaristo Alcocer Valle, en su carácter de Director General de la Visladuría, de la Procuraduría General de Justicia del Estado**, mediante el cual denunció hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a la servidora pública mencionada en el preámbulo.



..... **1466 C.M. y Situación Patrimonial de la Contraloría General, escrito signado por el Lic. Alfredo Evaristo Alcocer Valle, en su carácter de Director General de la Visladuría, de la Procuraduría General de Justicia del Estado**, mediante auto de fecha doce de julio de dos mil once (fojas 83-84), se radicó el presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver conforme a derecho correspondiente, asimismo se ordenó citar a la C. (sic), por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.

3. Que con fecha veinticuatro de agosto de dos mil once (fojas 94-96) se emplazó formal y legalmente a la encausada, para que compareciera a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.

4. Que siendo las once horas del día siete de septiembre de dos mil once (foja 101-102) se levantó el acta de audiencia en la que se hizo constar la comparecencia de la C. (sic) en compañía de sus abogados los licenciados Víctor Manuel Flores López y José Noé Muñoz Heredia, misma audiencia en la que la encausada da contestación a las imputaciones, en forma verbal y por escrito (foja 104-115), ofreciendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 114-115). Posteriormente mediante auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, se citó el presente asunto para dar resolución, la que ahora se pronuncia bajo los siguientes:

-----**CONSIDERANDOS**-----

I.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3, fracción V, 62, 63, 64, fracción I, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con los numerales 2 y 14 fracción I del Reglamento Interior de esta dependencia.

II.- Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo surte la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada a denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del LIC. ALFREDO FERRARISTO ALCOCER VALLE, en su carácter de Director General de la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 96 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, y del numeral 63, 68 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por el entonces Gobernador del Estado Eduardo Bours Castelo y reitrendado por el Secretario de Gobierno, Bulmaro Andrés Pacheco Moreno con fecha primero de julio de dos mil cuatro (foja 59). El ~~señalado~~ de los presupuestos, a calidad de servidor público de la encausada, quedó debidamente acreditada con la copia certificada del nombramiento otorgado a la C.

Ejecutiva Bilingüe, adscrita a la Sub-Procuraduría de Averiguaciones Previas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, otorgado por la C. Francisca Buisan Coronado, en fecha doce de noviembre de dos mil uno (foja 49); documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción II de Código Procesal Civil Sonorense aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 76 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

III.- Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de la servidora pública encausada, al hacerle saber de manera personal

y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, motivado del ejercicio de sus funciones que como servidora pública desplegó, así como su derecho a contestarlos, cifrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignaron en la denuncia y anexos que obran en los autos a fojas de la 1 a la 82 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se le comió traslado cuando fue emplazada. denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase -----

IV - El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las admitidas mediante acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil once (foja 118), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran. -----

V.- Por otra parte, en la audiencia de ley celebrada el día siete de septiembre de dos mil once (foja 101), a cargo de la encausada, quien en la misma dio contestación a las imputaciones mediante escrito de contestación expresando las defensas que consideró oportunas formular, así como el ofrecimiento de las pruebas que estimó pertinentes para desvirtuar los hechos imputados (fojas 101-115). -----

VI.- Ahora bien, esta autoridad con fundamento en el artículo 340 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual a la letra dice: "...En la redacción de sentencias se observarán las siguientes reglas: ... II.- Se decidirán previamente a la cuestión de fondo, las excepciones dilatorias que no fueren de previo y especial pronunciamiento, y en caso de que alguna se declare procedente, el juez se abstendrá de fallar la cuestión principal, reservando el derecho al actor..."; resultando lo siguiente:-----

... Una vez analizadas las constancias del sumario, y observando lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismo que a la letra establece lo siguiente:-----

"La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este Título se sujetarán a lo siguiente.

i. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado; y

ii. En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera ocurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiera cesado, si fuese de carácter continuo.

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa."

- De la transcripción del ordenamiento jurídico, se observa que en la fracción I se prevé el supuesto de que se prescribe la sanción si el beneficio o daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado; y en la fracción II, se indica que en los demás casos prescribirán en tres años, señalando también que el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del

momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo; por último, dicho precepto establece que en todos los casos la prescripción atendida se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. En ese sentido, esta autoridad advierte que existe plena certeza de que la fecha en la cual fue interrumpida la prescripción de la conducta que se le imputa a la servidora pública acusada, resulta ser la fecha en que se notificó a la encausada el auto de radicación del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, que es el acuerdo con el que se da inicio al mismo; es entonces, que para efectos de determinar la fecha para la interrupción de la prescripción de la sanción, esta autoridad decreta la fecha de emplazamiento a la audiencia de ley y notificación del auto de radicación del procedimiento administrativo de mérito, como la que interrumpe la prescripción de una posible sanción al servidor público, siendo ésta, el legal emplazamiento de la encausada, la correspondiente al día veinticuatro de agosto de dos mil once (fojas 94-96), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por lo que atendiendo la Jurisprudencia con registro 179465, de rubro "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUPTIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO", que más adelante se transcribe, se resuelve que ya han transcurrido más de tres años de la fecha con la que se hizo de conocimiento de la encausada el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa instruido en su contra; es decir han transcurrido en demasía los plazos de uno y tres años establecidos por el artículo 91 fracciones I y II de la citada Ley de Responsabilidades. Sirve de apoyo a lo anterior y resulta aplicable al caso concreto por analogía la jurisprudencia que se transcribe a continuación

Época: Novena Época
Registro: 179465
Materia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX
Enero de 2003
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./I. 203/2004
Página: 596

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUPTIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

De los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hizo para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las cláusulas que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citando para otra u otras audiencias, lo que produce que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que cometieron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerse expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el

procedimiento sancionador que debe agotarse a efecto de imponer una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mención de interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la actuación para autolimitar hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la relevancia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquella pueda ser utilizada para establecer si, momento a partir del cual se viviere a computar el citado plazo, en que este deje en estado de indefinición a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios.

SEGUNDA SALA

CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, 10 de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. Tesis de jurisprudencia 2003/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro.

--- Por tal motivo, esta resolución determina que opera a favor de la encausada la figura jurídica de la Prescripción en los términos antes señalados, por consiguiente es dable decretar la inexistencia de responsabilidad administrativa en razón a la prescripción de mérito, a la C.

de las imputaciones que el denunciante les atribuye en la denuncia de mérito en base a las anteriores consideraciones; lo anterior con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-----



En virtud de lo anterior, esta autoridad en base a los razonamientos citados en párrafos antecedentes y por los preceptos legales invocados en los mismos, considera que no es la intención o consecuencia de esta resolutoria el de responsabilizar o sancionar a la encausada, sino que, como es de general pleno derecho, dar la razón jurídica al que la tenga en base a las excepciones y probanzas aportadas a la autoridad que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente:-----

Registro No. 185655.

Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala,

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI.

Ciudad de México,

Agosto de 2002.

Página: 473.

Tesis: 2a. CXXXVII/2002.

Tesis: Aislada

Materia(s): Administrativa

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trata, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual obliga que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone. Asimismo, la determinación que forme dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las pruebas fundadas a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 84 y 85 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente. Esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefinido de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.

Amparo en revisión 301/2001. Sergio Alberto Zapata Gómez. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo J. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Gutiérrez. Secretario: Otilio Escudero Contreras.

--- En conclusión, no es dable sancionar en este caso a la C.

por lógica consecuencia, lo procedente es reconocer a su favor la **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**, por lo tanto, esta resolutoria considera innecesario entrar al estudio del resto de las argumentaciones vertidas por la encausada, pues en nada varía el resultado de la presente resolución, ya que con análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo por analogía para el anterior razonamiento: la jurisprudencia que a continuación se transcribe:-----

Oaxaca Época,
Registro 220006,
instancia, Tribunales Colegiados de Circuito,
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX,
Marzo de 1992,
Materia(s): Civil,
Tesis: II 3o. J/5
Página: 89

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 18/88. Jorge Luis Cubas Ornel, 14 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente:

Fernando Navarro Barter. Secretario: Miguel Ángel Tourney Guerrero.

Amparo directo 85/89. Xavier Morales Castro. 9 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel

del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuautliemac González Álvarez

Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campesinos, S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto.

Amparo directo 138/89. Elsa Estéfier Romero Pineda. 26 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Simón

José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto

Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente

José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz.

Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 1992, página 49.

--- En otro contexto, en virtud de que la encausada hace uso del derecho que tiene de oponerse a que se publiquen sus datos personales, se ordena que se publique la presente suprimiendo los mismos. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.-----

VII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo susuelto por la fracción VIII del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el numeral 14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:-----

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo I de esta resolución.

SEGUNDO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de la presente resolución, se reconoce la **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** a favor de la C. por encontrarse prescritos los señalamientos de responsabilidad administrativa que se le atribuyen y por consecuencia no ha quedado demostrado en autos el incumplimiento de algún supuesto contemplado por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

TERCERO. Notifíquese personalmente a la C. en el domicilio y por oficio al Denunciante, comisionándose a tal diligencia al C. LIC. MANUEL EFRAÍN TIRADO ROBLES y/o C. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ, y/o C. LIC. HÉCTOR IVÁN ARENAS SALAZAR, y como testigos de asistencia a los C. LILIANA CASTILLO RAMOS y ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ, todos servidores públicos de esta dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdo de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos a la C. LIC. VANESA GALVEZ PAZ y como testigos de asistencia a los C. LILIANA CASTILLO RAMOS y NORMA ALICIA AGUILAR PIMENTA.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CUARTO. En su oportunidad, brevia ejecutoria de la presente resolución, archívase el expediente como asunto total y definitivamente concluido.



Así lo resolvió y firma la C. Lic. María Esther Bazúa Ramírez, Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General, dentro del expediente administrativo número **RO/2015/113** en contra de la C.

ante los testigos que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. de Responsabilidad y Situación Patrimonial

LIC. MARIA ESTHER BAZUA RAMIREZ.

[Signature]

LIC. ALFONSO CALDERÓN ITURRALDE.

[Signature]

LIC. VANESA GALVEZ PAZ

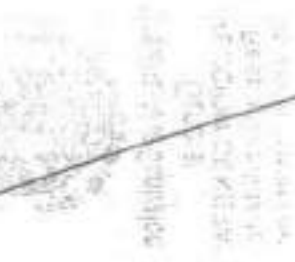
LISTA.- Con fecha 13 de abril de 2015, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. COMSTE.



Secretaría de la Contaduría

General

DIRECCION GENERAL
de Responsabilidades
y Situación Patrimonial



[A large, stylized signature or scribble is written across the center of the page, overlapping the official text and seal.]